

SEPTIEMBRE 18 DE 1934

45ª REUNION — Continuación de la 26ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor **ROBUSTIANO PATRON COSTAS**,

Presidente provisorio del Senado

y del doctor **CARLOS A. BRUCHMANN**,

Vicepresidente provisorio

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Arenas, Mario Bravo, Carlos A. Bruchmann, Rudecindo S. Campos, Aldo Antoni, Ramón S. Castillo, Mariano P. Ceballos, Raúl Ceballos Reyes, Francisco B. Correa, Atanasio Eguiguren, Francisco R. Galíndez, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, Juan José Lubary, José Nicolás Matienzo, Pío Montenegro, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Carlos R. Porto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Cruz Vera, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Lisandro de la Torre, Horacio Vera Ocampo.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, comunicando la designación del arzobispo de Paraná.

II.—Peticiones particulares.

2.—Proyecto de ley del senador Ceballos Reyes, acordando un subsidio anual a la cátedra de microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires.

3.—Consideración del despacho de la Comisión de Códigos, en el mensaje del Poder Ejecutivo sobre veto del artículo 3º de la ley de reformas al Código de Comercio. Se aprueba.

4.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión especial encargada de estudiar el proyecto

de ley de prensa del senador Sánchez Sorondo. Se aprueba.

5.—Moción del senador Sánchez Sorondo, para que se consideren los despachos de la Comisión de Peticiones y Poderes acordando pensiones, con un agregado del senador Arancibia Rodríguez, para que se considere el despacho de la Comisión de Obras Públicas, en su proyecto de ley sobre construcción de obras hidráulicas en la provincia de San Luis. Se aprueba.

6.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas a que se refiere el número anterior del sumario.

7.—Se consideran y aprueban varios despachos de las comisiones de Peticiones y Poderes y de Guerra y Marina acordando pensiones.

8.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, en el proyecto de ley, en revisión,

disponiendo la entrega de \$ 100.000 a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Se aprueba.

- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, en el proyecto de ley, en revisión, autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 2.000.000, para la lucha contra la langosta. Se suspende su consideración, por pasar la Cámara a cuarto intermedio.

—En Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de Septiembre de 1934, siendo la hora 16 y 15 minutos, dice el:

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Continúa la sesión.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Designación del arzobispo de Paraná. — Mensaje del Poder Ejecutivo

—Se lee:

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1934.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de poner en conocimiento de vuestra honorabilidad que con motivo de la terna formada por el Honorable Senado, en sesión de fecha 13 del corriente, ha designado para ocupar la dignidad de arzobispo de la arquidiócesis de Paraná al presbítero Zenobio Guillard, habiendo encomendado a la embajada argentina ante la Santa Sede, iniciar las gestiones de práctica a fin de obtener para dicho prelado su investidura canónica.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO
Carlos Saavedra Larraín.

—Al archivo.

II

Peticiónes particulares

Intelectuales de Montevideo solicitan la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de amparo a la prensa que conceda amnistía por los delitos de prensa cometidos hasta la fecha. (*A sus antecedentes*).

—La Confederación General del Trabajo solicita el pronto despacho del proyecto de ley sobre reformas al artículo 157 del Código de Comercio. (*A sus antecedentes*).

—Tiro Federal de Mendoza solicita premio. (*A la Comisión de Peticiones y Poderes*).

—Petrona L. de Franceschi solicita ser incluida en los beneficios de la ley 10.315. (*A la Comisión de Peticiones y Poderes*).

—Elvira E. Lascano y Carmen Oliver de Balarina solicitan pensión militar. (*A la Comisión de Guerra y Marina*).

2

SUBSIDIO A LA CATEDRA DE MICROBIOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BUENOS AIRES. — PROYECTO DE LEY DEL SENADOR CEBALLOS REYES.

—Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Concédese un subsidio anual de \$ 50.000 moneda nacional, a la cátedra de microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, para efectuar estudios relativos a los agentes etiológicos de las enfermedades endémicas de nuestro país.

Art. 2º — Mientras este gasto no se incluya en la ley general de presupuesto, se abonará de rentas generales con imputación a esta ley.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Raúl Ceballos Reyes.

FUNDAMENTOS

Es necesario preocuparse por el estado sanitario de la población, que en ciertas regiones del país constituye un factor de detención de su progreso y motiva graves trastornos sobre la economía y salud de sus habitantes.

El celo con que nuestras autoridades sanitarias encaran el problema de su solución, tropieza con las dificultades que presenta el desconocimiento que aun existe sobre la biología de los agentes etiológicos de algunas enfermedades, de su mecanismo de infección y del papel que representan los reservorios y vectores que mantienen a través del tiempo plagas difíciles de combatir por fallas de las medidas de profilaxis clásica.

Podríanse citar muchos hechos confirmatorios; recordemos que la fiebre de Malta, casi desconocida años atrás, hoy ha adquirido una gran importancia, y los numerosos casos diagnosticados en regiones aisladas, hablan de su gran difusión. Es que nuestro suelo, con sus caracteres climáticos diversos, ofrece un terreno propicio para muchas enfermedades tropicales y subtropicales que nos invaden y nuestro deber es evitar que ellas se arraiguen.

La fiebre tifoidea, tan frecuente en nuestro medio, ha permitido hacer estudios interesantísimos y demostrar que muchos de los fracasos de la profilaxis son debidos al imperfecto conocimiento que se tiene de gérmenes homólogos que constituyen el grupo de los paratifoideos, que últimamente han sido estudiados por ilustres experimentadores europeos, demostrando la importancia que tienen en la producción de grandes epidemias, especialmente los que comprenden el grupo de los paratifoideos C, que asolan regiones del viejo mundo y que han alcanzado también a nuestro país, como lo comprobó el profesor Bachmann, al descubrir su existencia en Buenos Aires. Los paratifoideos A y B que fueron estudiados también por este investigador, demos-

trando su gran difusión en las provincias del Norte, permitiendo encauzar con más provecho las medidas higiénicas.

La peste bubónica, que llegó a nuestro territorio hace ya muchos años, habiéndose hecho endémica en algunas regiones, desde donde constituye un grave peligro, que con grandes esfuerzos es apenas posible contener, no puede ser eliminada definitivamente por inconvenientes aun no perfectamente establecidos. Hace poco, se descubrió como reservorio regional de nuestro suelo al cui, que siendo un animal salvaje, escapaba a las medidas de profilaxis eficaces en la lucha contra los reservorios conocidos y este importante hecho, cuyo conocimiento es un adelanto, debe estimular nuevas investigaciones.

Otra enfermedad, la tularemia, que en Estados Unidos de Norte América ha adquirido un gran desarrollo, es muy posible que exista en nuestro territorio, ya que en frecuentes ocasiones han aparecido intensas epizootias entre roedores sin llegar a determinarse su causa.

Todos estos hechos indican la necesidad de favorecer la investigación para crear un conjunto de experimentadores especializados en los intrincados problemas de la biología microbiana, de los que la Nación podrá esperar muchos beneficios al mismo tiempo que se honrará la ciencia argentina.

En la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, la cátedra de microbiología, desde donde se imparte la enseñanza de esta rama de la medicina a nuestros médicos y que cuenta con el personal más autorizado para dirigir el curso de estas investigaciones, desde donde surgieron las orientaciones prácticas para reducir la anquilostomiasis y el paludismo, debe ser el centro organizador de estos altos estudios.

En el extranjero se ha fomentado entusiastamente, por medio de donaciones particulares o subvenciones oficiales, los afanes de sus hombres de ciencia, en cambio entre nosotros, abandonados a sus escasos recursos, sus iniciativas se malogran en perjuicio de todos y de nuestro prestigio ante el exterior.

Al presentar este proyecto de ley, me guía el convencimiento de que la ayuda oficial que recibirá la cátedra de microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, hará posible que contemos con un centro dedicado a la investigación pura de la microbiología y habremos contribuido a elevar el nivel científico de nuestro país.

R. Ceballos Reyes.

—A la Comisión de Presupuesto.

3

REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se había resuelto tratar en la sesión de hoy, como primer asunto, el veto referente a la reforma al Código de Comercio.

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha considerado la observación formulada por el señor senador Matienzo al pronunciamiento

de la Honorable Cámara de Diputados al tratar el veto del Poder Ejecutivo al artículo 3º del proyecto de ley número 11.729, y no encuentra reparo constitucional que oponer a dicha comunicación.

Sala de la comisión, agosto 11 de 1934.

Ramón S. Castillo. — Guillermo Rothe. — Eduardo Laurencena.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Códigos ha considerado el mensaje del Poder Ejecutivo observando el artículo 3º del proyecto de ley número 11.729; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejo no insistir.

Sala de la comisión, septiembre 4 de 1934.

Mario Bravo. — A. Arancibia Rodríguez. — Carlos Serrey.

Buenos Aires, 18 de julio de 1934.

Al señor presidente del Honorable Senado.

La Honorable Cámara que tengo el honor de presidir, ha considerado en sesión de la fecha, la observación formulada por el Poder Ejecutivo al artículo 3º de la ley número 11.729; y ha tenido a bien confirmar su sanción anterior, con exclusión de la disposición transitoria del artículo 3º.

Dios guarde al señor presidente.

MANUEL A. FRESCO
Carlos González Bonorino.

Mensaje

Buenos Aires, 2 de octubre de 1933.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 72 de la Constitución nacional, devuelve observada a vuestra sido remitido a los efectos de su promulgación, sobre modificaciones a los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Código de Comercio (número 11.729).

Esta actitud del Poder Ejecutivo la determina una consideración fundamental, que sabrá valorar el ilustrado criterio de vuestra honorabilidad, y que no ha tenido oportunidad de

enunciar en el curso del debate parlamentario, que afecta principios de orden institucional y respetables intereses sociales que no es posible desatender, sancionando vuestro proyecto de ley.

El artículo 3º del proyecto de ley preceptúa que sus disposiciones, declaradas de orden público «se aplicarán a los casos de despido ocurridos desde el 1º de agosto de 1932».

Y bien; el Poder Ejecutivo comparte la finalidad esencial que ha inspirado y promovido la redacción del proyecto, tendiente a mejorar las condiciones del empleado de comercio, rodeándolas de garantías efectivas que impidan exponerlo al abuso o arbitrariedad del empleador. Y la comparte, porque en todo momento ha considerado, como una función de buen gobierno, que es menester mejorar la posición moral y económica de los hombres que, con su trabajo, contribuyen a la grandeza de la Nación, convencido de que, enalteciendo la dignidad espiritual de los ciudadanos mediante una conveniente independencia material, se lograrán individualidades fuertes, cimentándose, así, las bases mismas de la colectividad.

Por esto, acoge en principio, la iniciativa que responde a este elevado concepto de solidaridad social como inspiradora de leyes de alta previsión y protección, de justicia y de paz.

Pero, con cabal comprensión del principio de equilibrio, que es immanente en todas las cosas; dispuesto a respetar y mantener el necesario concurso de todas las fuerzas que convergen a una misma finalidad, a pesar de sus apariencias y denominaciones distintas, se ha hecho, también, el firme propósito de rehuir favoritismos que, por su misma naturaleza se hallan reñidos con aquel concepto superior y esterilizarían todo buen propósito.

Vuestra honorabilidad confiere a las disposiciones del proyecto efecto retroactivo al 1º de agosto de 1932, no sin antes robustecerlas declarando a aquéllas «de orden público».

Es verdad que el principio de la no retroactividad de las leyes, estatuido en el artículo 3º del Código Civil, constituye un mero precepto legislativo y susceptible, por ende, de modificación o derogación por el mismo poder que hace la ley, como lo ha declarado, en repetidos casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver, entre otros, fallos insertos en la Revista de Jurisprudencia Argentina, tomos IX, XVII y XXVII, páginas 194, 19 y 437, respectivamente). Pero es, también, inconcuso de acuerdo con el mismo alto tribunal, que aquel

precepto adquiere toda la trascendencia de un principio constitucional, cuando la aplicación de la ley revestida con efecto retroactivo lesiona el derecho que ha incorporado a su patrimonio el habitante de la Nación, porque, en tales casos, «el principio de la no retroactividad se confunde con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, consagrada por el artículo 17 de la Constitución». (Fallos: T. CXXXVII, pág. 47).

«La palabra propiedad, ha dicho la Corte Suprema de la Justicia de Estados Unidos, y con ella, la de nuestro país, es comprensiva de todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad» (115 U. S. 620). La aplicación del proyecto de ley remitido por vuestra honorabilidad vulneraría el derecho patrimonial ya adquirido por los empleadores, resultando, de tal suerte, incompatible con la inviolabilidad de la propiedad, asegurada por el ya mencionado precepto constitucional, que la protege contra los efectos de cualquier legislación ulterior a los derechos adquiridos; y, al alterar los derechos emergentes de los contratos ejecutados, ya extinguidos, reviviéndolos, sin el consentimiento de las partes, se apartaría, además, visiblemente, de los grandes objetivos que han proclamado con énfasis el preámbulo de la Constitución.

Ni la declaración de «orden público» ni el artículo 5º del Código Civil, que podría invocarse para fundamentarla, ni la justa interpretación de la norma «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio», estatuida en la primera parte del artículo 14 de la Constitución nacional, constituyen, en definitiva, antecedentes suficientemente valederos, que enerven la consistencia de la opinión que la ha sugerido al Poder Ejecutivo vuestro proyecto de ley en la forma que queda expuesta. Porque no es admisible que «el orden público» pueda tener la virtud de facultar al mismo poder público que ha sancionado aquellos preceptos, atribuciones más amplias que las que le confiriera el pueblo, ni para disminuirle las restricciones que le fueron impuestas por la Constitución misma, «pues es fácil alcanzar que si algo interesa a una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de la propiedad privada, y en el afianzamiento de la justicia, es la estabilidad de los derechos patrimoniales; es que los contratos sean lealmente cumplidos; y es, en fin, que no sea dado siquiera abrigar el temor de que puedan sancionarse y hacer efectivas leyes excepcionales que, como aquellas a que aludía Marshall, en el proverbial caso de Dartmouth College, debilitaron la confianza entre hombre y hombre y dificultaron

todas las transacciones particulares, por la dispensa que hacían del fiel cumplimiento de las obligaciones». (Corte Suprema de Justicia, Agosto 21 de 1922).

Por los motivos expresados, el Poder Ejecutivo observa y devuelve vuestro proyecto de ley.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Manuel de Iriondo.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — En consideración.

Sr. Rothe. — Pido la palabra.

Este proyecto, en revisión, pasó a la Comisión de Negocios Constitucionales, con motivo de la observación formulada por el señor senador por Tucumán, relativa a la forma en que había sido tratado en la Cámara de Diputados.

Manifestó el señor senador, que la Cámara de Diputados había prescindido del artículo 72 de la Constitución y había omitido, tanto en la deliberación como en la votación, considerar el proyecto de ley, limitándose a votar el despacho de su Comisión de Legislación.

La cuestión propuesta por el señor senador tiene dos aspectos: uno, relacionado con la facultad del Senado para rever los procedimientos internos de la Cámara de Diputados, y otro relacionado con la interpretación del artículo 72, relativo al veto.

La Comisión de Negocios Constitucionales se ha ocupado con preferencia del primer aspecto de esta cuestión, que es el único que a su juicio, debía motivar su dictamen. Las reglas que fijan las relaciones entre las Cámaras están sintéticamente expresadas en dos o tres párrafos de Cushing, que me permitiré leer.

Dice en el capítulo 8º, que trata de las reglas relativas a la conservación de la armonía y de la independencia entre las diversas ramas de la legislatura: «Según la constitución de la legislatura, es esencial para el debido y eficaz cumplimiento de sus funciones, que las diversas ramas de que está compuesta estén sobre un pie de la más perfecta igualdad la una con respecto de la otra y que bajo todos los aspectos sean enteramente independientes la una de la otra».

El segundo párrafo: «Para conseguir la conservación de estos privilegios esenciales de igualdad e independencia, es importante que ninguna rama invada las atribuciones de la otra, ocupándose de alguna materia que la Constitución ha confiado exclusivamente a la otra rama, ni que intervenga en materia alguna pendiente ante ella, de manera a impedir ni aún a influenciar esa libertad de la discusión

o de la acción, que es esencial para un consejo libre; ni reclamar ni mucho menos tratar de ejercer ningún control o autoridad sobre las personas de los miembros o empleados de la otra.»

Y como consecuencia de estos principios, establece la ficción contenida en el número 1.704, en estos términos: «Esta regla procede sobre la inteligencia y da por concedido que los procedimientos y discusiones de cada Cámara son conocidos solamente a sus propios miembros y dentro de su recinto y que solamente pueden hacerse conocer con regularidad por ella misma, ni puede tomarse noticia de ellas en otra parte, excepto con su propio consentimiento.»

Estos principios esenciales en las relaciones que deben guiar a los cuerpos legislativos están abonados, además, por un principio fundamental de derecho público, incorporado al derecho constitucional argentino consistente en que todo poder que tiene otorgado por la Constitución una facultad interpreta aquélla, a este respecto, soberanamente aquélla. De tal manera que la Cámara de Diputados ejerceita un poder soberano al interpretar la forma y procedimiento a que debe someterse el veto pronunciado por el Poder Ejecutivo con respecto a la ley observada que tratamos.

Las consecuencias de la aplicación de esta regla no son otras que la conservación de la armonía indispensable para que los dos cuerpos colegisladores y el Poder Ejecutivo puedan desempeñar con eficacia su acción. De otra manera, si el Poder Ejecutivo o cualquiera de los cuerpos colegisladores tuvieran la facultad de hacer observaciones al procedimiento empleado en la sanción de los proyectos, este contralor sería ejercido recíprocamente, y de ese modo los debates degenerarían en cuestiones de forma y la armonía de acción de los poderes públicos desaparecería.

Por lo demás, el dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales, se limita a decir que no encuentra reparo constitucional que oponer a la comunicación de la Cámara de Diputados, y esta comunicación expresa de un modo positivo y claro la voluntad de la Cámara con respecto al artículo vetado por el Poder Ejecutivo.

La comisión ha entendido que no ha sido el propósito del autor de la iniciativa pasar este asunto a su estudio, ni la voluntad de la Cámara, que la comisión dictaminara sobre la inteligencia que debe dar el Senado al artículo 72. Esta es, desde luego, una de las más complejas cuestiones de nuestro derecho constitucional; se relaciona con las reglas de interpretación y mé-

todo de análisis a que pueden prestarse las cláusulas constitucionales, desde el examen del punto de vista de los principios filosóficos, hasta la historia literal del artículo con todas las formas de exégesis susceptibles de ser aplicadas a los preceptos legales.

Ha sido esta cuestión, desde hace muchas décadas, motivo de extensos debates en las Cámaras y de exposiciones también extensas de doctrina constitucional. Para la comisión, esta no era, desde luego, la materia de su pronunciamiento, y en realidad, dados los precedentes sentados por el Parlamento argentino en la interpretación de este artículo, que son de la más completa flexibilidad, puesto que ha admitido todas las formas y métodos al considerar vetos opuestos por el Poder Ejecutivo en distintas oportunidades, el debate sobre esta materia tiene un carácter bizantino, de estudio académico, y de ningún modo conduciría a un fin práctico y útil como es el que debe guiarnos al considerar el despacho de la Cámara de Diputados.

Nada más, señor presidente.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

La Comisión de Códigos aconseja no insistir en la cláusula tercera del proyecto de ley número 11.259, vetada por el Poder Ejecutivo, entendiendo así que deja cerrado su ciclo parlamentario, y puesto, por consiguiente, en todo su vigor el resto de sus disposiciones no observadas.

Para expresar los fundamentos de este despacho, la mayoría de la comisión necesita recordar algunos de los antecedentes de la ley, y exponer después al Senado las razones de orden legal y constitucional que la han llevado a esta conclusión.

Necesito dejar expresa constancia, señor presidente, que tanto el Senado como la Comisión de Códigos que lo asesoró en el despacho que sancionó en la sesión de 19 de Septiembre del año pasado, han compartido en todo momento los preceptos fundamentales o cardinales de la ley, cuyos propósitos altruistas y de justicia no ha desconocido en ningún momento, aceptando todas las reformas posibles que importaban un evidente mejoramiento para las condiciones de vida y de trabajo de los empleados de comercio.

Es así, cómo el Senado, en su sanción, no obstante existir divergencias de detalles, pudo coincidir con el despacho de la Cámara de Diputados en los siguientes puntos, muy interesantes, de la reforma. Aceptó el Senado la mejora general del articulado del Código de Comercio en lo que se refiere al despido, en cuanto a su plazo y cantidades de

pago; estableció que los obreros quedaban incorporados a los beneficios del código, que solamente existían para los empleados y dependientes de comercio; impuso las licencias en caso de enfermedad inculpable para todo el personal de comercio, con 3 meses de sueldo y 3 meses más de medio sueldo, según su antigüedad; y agregó 6 meses más de licencia sin goce de sueldo con la retención del empleo; estableció que todas las indemnizaciones por despido eran inembargables, que no estaban sujetas a moratoria alguna y gozaban de un privilegio especial en caso de quiebra; conservaba el empleo del conscripto durante el tiempo de la conscripción; autorizó el plazo de prueba antes de realizar el contrato definitivo de trabajo entre empleador y empleado; determinó con precisión, lo que no hace el Código de Comercio, la rescisión del contrato por causas exclusivamente imputables al patrón; estableció el registro del personal, obligatorio para todo patrón, y el certificado de trabajo; y, por último, declaró nula toda convención en contrario que quisiera dejar sin efecto o burlar los beneficios de la ley.

Pero el Senado no aceptó las indemnizaciones extraordinarias y retroactivas de la ley. Eliminó de su despacho el artículo 3º que el Poder Ejecutivo vetó, exactamente por las mismas razones y citas legales que tuve la oportunidad de expresar en el Senado, como miembro informante de la ley.

Pero el Poder Ejecutivo, por una inadvertencia o por un error, no ha vetado sino la retroactividad transitoria, parcial, establecida por el artículo 3º de la ley y dejó vigente la retroactividad más grave, extensa e ilimitada que la ley impone en su artículo 157 que queda en vigor y dice lo siguiente: «También abonará el principal al empleado en todos los casos de despido, haya o no preaviso, una indemnización no inferior a la mitad de su retribución mensual por cada año de servicio o fracción mayor de 3 años. En ningún caso, esta indemnización será inferior a un mes de sueldo ni mayor de \$ 500 por cada año de servicio».

«En todos los casos de despido», dice la ley. «El despido lo da el empleador y lo da el empleado, así lo dice el inciso 6º del mismo artículo 157 de la ley, en igualdad de condiciones, con los mismos requisitos e idénticas responsabilidades. Esto es así, porque jurídicamente el plazo de despido o plazo de prevención o de preaviso o *delai congé*, como se llama en derecho francés, es el término que debe transcurrir entre la denuncia del contrato de

trabajo por cualquiera de las partes contratantes y la cesación efectiva del trabajo».

De manera que todo contrato entre empleadores y empleados de comercio en el momento en que esta ley sea promulgada, queda substancialmente modificado; todo empleado se constituye en acreedor de cada patrón por una suma líquida exigible y de plazo vencido, igual al número de años de servicio por una cuota de media mensualidad por año, sean 10, 15, 20, 30 años atrás. El empleado no tiene, el día de la promulgación de la ley, más que pasar por la caja de su patrón, notificarle que se va y pedirle que le pague la indemnización. Si prefiere esperar el empleado, puede irse cuando quiera y cobrar cuando le convenga esta indemnización extraordinaria.

Cuando impugné este despacho ante el Senado, dije que el Congreso no tenía facultades para desapropiar en esta forma del dinero perteneciente a los empleadores. Que lo mismo podría haberle impuesto la entrega a los empleados que se van de una parte de su capital, de su ganancia, el pago por tiempo indefinido de una jubilación o pensión vitalicia. Obligados a pronunciarnos sobre el veto parcial del Poder Ejecutivo, el Senado no puede, a juicio de la Comisión de Códigos, constitucional, ni lógicamente, sino aceptar el veto como lo propone; no puede la mayoría del Senado, que rechazó esos artículos, insistir en ellos. La ley será inconstitucional y será dura, pero es ley.

Hasta aquí, señor presidente, llegan los motivos que tendría la Comisión de Códigos, en mayoría, para aconsejar al Senado la no insistencia, declarando, como lo he dicho al iniciar esta exposición, que, a su juicio, el proyecto queda en vigor como ley, si el Senado acepta esta observación del Poder Ejecutivo; pero debo agregar, en nombre de toda la Comisión de Códigos, los antecedentes constitucionales del caso, tanto más, cuanto que la Comisión de Negocios Constitucionales considera que la misión que se le encomendara con el despacho que se le solicitó, no se refiere a este punto.

En presencia de esta situación y de las advertencias que ha hecho el señor senador por Tucumán, respecto a la gravedad y a la importancia de esta solución constitucional, la Comisión de Códigos expone, siquiera sea someramente, las razones de esa índole que ha tenido presente para aconsejar el despacho en la forma que lo propone.

Conozco las dificultades y la discusión que

tal solución presenta y ha de provocar. Es muy extensa y muy antigua, como lo ha recordado con exactitud el miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales, la discusión y la exégesis de los textos constitucionales, para interpretar el alcance del artículo 72 de la Constitución; pero no me propongo distraer al Senado sino breves momentos.

La dificultad emana, señor presidente, de que el artículo 72 de la Constitución, que autoriza al Poder Ejecutivo para vetar total o parcialmente una ley, no ha determinado con claridad cuál es el trámite y cuál es la forma en que se ha de solucionar el caso del veto parcial. Hay precedentes y opiniones las más diferentes y discordantes.

La Comisión de Códigos ha creído que debía atenerse en primer lugar a los precedentes constitucionales que emanan de la autoridad de los mismos autores de la Constitución del 53, cuyo artículo 69 no fué modificado por el 72 de la Constitución vigente.

Esos precedentes admiten el veto parcial, cuya existencia se ha negado en muchas oportunidades; y la admiten en la misma forma y con el mismo trámite que la Comisión de Códigos indica en este despacho.

El primer caso fué el de la ley de ciudadanía, vetada en dos de sus artículos por el Poder Ejecutivo en el año 1857.

El veto parcial de esta ley lo suscribió Derqui, ministro de Urquiza, que fué miembro de la Asamblea Constituyente de 1853 y se votó en la Cámara de Diputados, expresando terminantemente que en el caso de veto parcial debe circunscribirse única y exclusivamente el Congreso a la consideración y discusión de los artículos vetados, llegando hasta hacerse una votación especial, que consigna así el acta: «Se procedió a votar si se reconsideraba o no todo el proyecto y resultó la negativa por mayoría», es decir, que en esta sesión el Congreso declaró que ni siquiera se podía discutir la totalidad del proyecto y que sólo correspondía la votación lisa y llana de los artículos vetados.

Lo mismo ocurrió con la ley de elecciones vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, poco tiempo después, en las sesiones del mismo año. Se votó por la insistencia y la no insistencia de las cláusulas vetadas, y se resolvió aceptarlas. Esto ocurría en la Cámara de Diputados de la Nación; pasado al Senado el primer caso de no insistencia en la ley de ciudadanía a que me he referido, se encontraban en el recinto los senadores Pedro Ferrer, Martín Zapata, Roberto Godoy, Manuel Leiva y Salustiano de Za-

valía, todos constituyentes del Congreso del '53 y algunos de ellos redactores de la Constitución; y, al considerar el veto aceptado por la Cámara de Diputados, dice el senador Zavallía:

«Que en conformidad al artículo 69 de la Constitución, que dice: Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones en ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí y por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Este asunto no debía ser considerado por el Senado; pues que como se había visto por la nota que acababa de leerse, las disposiciones vetadas por el Poder Ejecutivo, no habían sido confirmadas por la Cámara que inició la ley, sobre lo que el señor senador se explanó detenidamente tratando de probar, que bastaba que la Cámara iniciadora no insistiese sobre el asunto vetado para que prevaleciese el veto.»

El Congreso votó, a pesar de esto, por la insistencia o no insistencia, resultando 10 votos por la confirmación del inciso y 11 por la no insistencia, especificándolos así.

Este es un caso en que el Senado y la Cámara de Diputados discutieron y resolvieron un caso idéntico al que tiene hoy a consideración el Honorable Senado. Ahora bien; entre la infinidad de cuestiones que se plantean con el artículo 69 de la Constitución anterior, 72 de la vigente, se insinúa también y se sostiene por algunos, y lo expresa así el señor senador Zavallía, que no hubiera sido necesaria la sanción del Senado, toda vez que en la Cámara iniciadora no se ha producido la votación necesaria de los dos tercios para insistir en la ley.

Esto es muy dudoso y debe procederse con las mayores precauciones a fin de evitar que se produzcan nulidades e inconvenientes para la debida aplicación de la ley, por no haberse producido una votación que el Senado seguramente no tiene ningún inconveniente en hacer, y a fin también de no renunciar facultades que pueden corresponder al Senado.

Por otra parte, el argumento de que no es necesario que pase a la Cámara revisora el veto

parcial, cuando en la Cámara de origen no ha obtenido los dos tercios necesarios, de insistencia o se ha resuelto no insistir, es una cuestión que se presta a graves dificultades, que tiene precedentes y opiniones muy autorizadas en contra y en razón también de la última parte del artículo 72, que según algunos tratadistas está expresamente puesto para el caso del veto parcial, y establece que si no estuvieran de acuerdo las dos Cámaras, ese proyecto no podrá ser considerado en las sesiones del año en curso.

En el año 1881, se produjo en el Congreso la discusión en que intervinieron Nicolás Calvo, y don Bernardo de Irigoyen, con motivo de la ley de municipalidad para la Capital de Buenos Aires, vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo.

Y Calvo, hablando del veto parcial, y de su procedimiento, dice lo siguiente: «El Poder Ejecutivo, al presentar su veto parcial, dice: Me niego a promulgar la ley como está; para promulgarla propongo tales modificaciones y si son aceptadas no veto. La Cámara toma en consideración esas objeciones, con arreglo de la Constitución. El Congreso insiste, o no insiste o difieren las Cámaras entre sí. Si son rechazadas esas objeciones por dos tercios de votos en cada Cámara, el Poder Ejecutivo tiene que someterse a la resolución del Congreso y promulgar la ley, porque el Congreso ha insistido. *Si son atendidas dichas objeciones en ambas Cámaras, por dos terceras partes de votos o una simple mayoría, entonces los presidentes de ambas Cámaras deben dirigir una simple nota al Poder Ejecutivo comunicándole que ellas han aceptado las objeciones hechas por el Poder Ejecutivo, que el Congreso no insiste y que puede promulgar la ley, con las modificaciones en ellas introducidas, si hubieran sido aprobadas, bien entendido.* Es exactamente el caso que estamos tratando en este momento en el Senado.

«Este es mi punto de vista. — agrega Calvo — Lo he sostenido en el Senado del Paraná, o en sus comisiones, no estoy seguro, pero no he mudado de opinión desde entonces, porque además del texto de la Constitución de mi país, tengo en mi apoyo el texto explicativo del origen de esa misma Constitución».

Pero se insistió en que se llamase al ministro de Relaciones Exteriores, para pedir su opinión sobre este importante asunto del veto parcial, y entonces, concurrió don Bernardo de Irigoyen, que dijo lo siguiente: «Las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto sancionado, no tienden, sin duda alguna, ni a impedir, ni a pa-

ralizar la ley: el Poder Ejecutivo se reduce, simplemente, a hacer notar los inconvenientes que encuentra en dos artículos incidentales de la ley, para pedirle al Honorable Congreso que esos artículos sean modificados. He oído, aun cuando no he tenido tiempo de detenerme a estudiar este punto, pues no pensaba que se resolviera tratarlo en este momento, he oído, digo, algunas de las indicaciones que se hacían por los señores diputados que no participaban de mis ideas. Parece que ellos piensan que una vez observada una ley, aunque sea en un punto incidental, esta ley si no es sostenida por los dos tercios de cada Cámara, queda en suspenso hasta el próximo año. Debo decirlo con toda franqueza, que la conclusión no me parece aceptable porque vendríamos a tener este resultado: el Poder Legislativo sanciona una ley; el Poder Ejecutivo la acepta, limitándose a observaciones de detalle; las dos Cámaras del Congreso encuentran admisibles las observaciones, y se conforman en ellas. Entre tanto, el resultado vendría a ser el siguiente: que por lo mismo que había marcada uniformidad de opinión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no habría ley». Me parece que esta es una conclusión un poco violenta; y es por esto que no me inclino a aceptarla.

«Me explico que cuando alguna de las Cámaras rechaza las observaciones del Poder Ejecutivo, aun cuando las acepte la otra, queda la ley en suspenso para el año entrante; *pero no me explicaré jamás, que fuese una consecuencia regular, que, por lo mismo que las dos Cámaras encuentren razón en el Poder Ejecutivo y creen que debe modificarse un artículo de la ley, se concluya por decir: pues no hay ley.*»

Así, de acuerdo con esta doctrina, por lo menos desde un punto de vista general y fundamental, se expidió la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados al enviarnos el despacho que está en discusión. Y he insistido en los antecedentes y en la necesidad de que se produzca esa votación, porque me ha parecido entender de las palabras del señor senador por Tucumán, emitidas en la sesión anterior, y al fundar su moción de que el asunto pasará a la Comisión de Negocios Constitucionales, que no tenemos ley; que el caso se habría presentado en forma de hacer exigible una nueva sanción complementaria para que este proyecto siguiera su curso, porque no hay veto parcial dentro del mecanismo de nuestra Constitución.

De todas maneras, si no fuera así, siempre sería, a mi juicio, eficaz y necesarias las expli-

caciones que he dado, tanto más, cuanto que mi palabra sobre este asunto no puede ser sospechada de parcialidad ni de apasionamiento alguno, desde que yo he sido y soy contrario a la parte retroactiva de la ley, y sin embargo, sostengo, con toda sinceridad, que esa ley es ley, de acuerdo con la Constitución, si el Senado aprueba este despacho.

Nada más, señor presidente.

Sr. Bravo. — Muy bien.

Sr. Matienzo. — Pido la palabra.

Si el Senado hubiera escuchado la indicación que tuve oportunidad de hacer en la sesión del 19 de Julio próximo pasado, ya tendríamos la ley de reformas al Código de Comercio; pero el Senado no aceptó mi indicación.

Voy a leer, señor presidente, las palabras que pronuncié en aquella sesión. Hablé sobre dos aspectos de la cuestión: el aspecto constitucional y el aspecto, diríamos, legal, con el cual yo estaba completamente conforme.

El señor senador por la Capital, doctor Palacios, había hecho moción de tratar sobre tablas la comunicación venida de la Cámara de Diputados, en la que se decía que la Cámara de Diputados había aceptado el veto al artículo 3º de la ley 11.259. Entonces yo dije: «Me parece un poco precipitado votar este asunto hoy mismo, porque él afecta la interpretación del artículo 72 de la Constitución. La Cámara de Diputados ha prescindido del texto del artículo 72 de la Constitución, que voy a leer. Dice así:

«Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo — al proyecto — y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión.

Es decir, la Cámara de Diputados era la originaria y debía pasarlo al Senado, si lo confirmaba.

Si ambas Cámaras lo sancionan íntegramente por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; — es decir, por la confirmación íntegra del proyecto o por la no confirmación — y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones — si una Cámara dice sí y otra, no —, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Este artículo está tomado casi textualmente de la Constitución de Estados Unidos. La única diferencia sería que existe, es que la Constitu-

ción de Estados Unidos dice que las objeciones del Poder Ejecutivo se insertarán en el Diario de Sesiones; pero la mala traducción de «Journal», que significa diario de sesiones, fué tomada por prensa en general o diarios comunes. Por eso dice la Constitución que las objeciones del Poder Ejecutivo serán publicadas por la prensa.

Ahora bien: en la Cámara de Diputados ayer no se ha votado sobre la confirmación del proyecto íntegro, se ha votado sí o no sobre un proyecto de resolución de la comisión. De manera que no hay un verdadero pronunciamiento constitucional que nos obligue a nosotros a tratar este asunto inmediatamente.

Yo creo, señor presidente, que con un poco de buena voluntad y en el deseo de facilitar la solución, aceptando el veto en lo que se refiere al artículo 3º, lo que correspondería es esto: considerar que la Cámara de Diputados ha sancionado un nuevo proyecto, excepto el artículo 3º, y que ha admitido el veto. En ese caso, yo aceptaría tratar ese nuevo proyecto de la Cámara de Diputados y votarlo inmediatamente.

Nada más.

Entonces el señor senador por la Capital, que había hecho moción para tratar este asunto sobre tablas, dijo que, como yo había hecho una objeción, correspondía pasar este proyecto a la Comisión de Negocios Constitucionales, a la cual se solicitaría el pronto despacho, a lo cual yo dije: apoyado. Naturalmente, no podía oponerme a que se estudiara este asunto por la Comisión de Negocios Constitucionales, ya que algún señor senador tenía dudas al respecto. Pero yo creo que no había ninguna duda, y podía tratarse inmediatamente. Entonces el señor presidente dijo: «Está en discusión la moción formulada por el señor senador por la Capital, entendiéndolo el presidente, doctor Roca, que la indicación consistía en que pasase conjuntamente a las comisiones de Negocios Constitucionales y de Códigos». Se complicaba un poco. *Sr. Palacios.* — Sí, señor presidente. *Sr. Sánchez Sorondo.* — A las cuales deberán pasar también las observaciones formuladas por el señor senador por Tucumán. *Sr. Bravo.* — A ese efecto pasará a la Comisión de Negocios Constitucionales. *Sr. Presidente.* — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador por la Capital.»

Se votó, y resultó afirmativa.

Eso quiere decir que el Senado complicó la cuestión, dándole mayor trascendencia que la que tenía, porque envió el asunto a dos comisiones, la de Negocios Constitucionales y la de Códigos, para estudiar una simple proposición que yo hacía, esto es, de que se considerara el proyecto de la Cámara de Diputados como proyecto nuevo y se aprobase inmediatamente. De

manera, que me sorprende toda la trascendencia que se da a este debate.

El miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales ha expuesto una gran doctrina sobre la independencia de las Cámaras, pero no hay nada de eso. Y el señor senador por San Luis ha hecho la demostración de la pertinencia del proyecto y del veto. Vuelvo a repetir que no hay nada en discusión, señor presidente. Cuando una Cámara recibe un veto, sea parcial o no, porque el veto es siempre uno solo, si esa Cámara acepta el veto, termina allí el asunto y no tiene que pasarlo a la otra Cámara. En el caso de que no lo acepte, entonces sí lo pasa.

De manera, que si la Cámara de Diputados hubiese insistido en el veto por dos tercios, entonces nosotros estábamos obligados a considerar el veto. Aquí ha desaparecido el veto porque la Cámara de Diputados lo aceptó y ha hecho un proyecto nuevo, que consiste en la ley anteriormente sancionada, menos el artículo 3º. Por eso decía que, con buena voluntad, a pesar de la forma un tanto rara de la comunicación hecha por la Cámara de Diputados, se puede considerar constitucionalmente que hay una comunicación de un proyecto nuevo, y aceptarlo inmediatamente.

Ahora voy a leer algunos antecedentes sobre esta cuestión del veto, que existen en Estados Unidos, porque nuestros antecedentes son muy malos y deficientes. El último antecedente argentino que yo conozco es el de la intervención en San Luis — y el señor senador por San Luis que acaba de hablar lo conoce muy bien —; es un malísimo antecedente. El presidente Irigoyen aceptó la doctrina del veto parcial: modificó la ley hecha por el Congreso e hizo la intervención que le dió la gana. Desechó los artículos que le incomodaban y aceptó los que le convenían.

Otro caso que conozco, lo tiene la Comisión de Negocios Constitucionales hace mucho tiempo, y sobre el cual no se ha expedido, aunque se expidió sobre éste, a pesar de que lo tenía a su estudio desde hace poco tiempo. Me refiero al caso de la ley número 6.007, de jubilaciones, en que por un veto parcial se llegó a una solución en que resultaba perjudicada enormemente la Caja de Jubilaciones. De manera, que los vetos parciales que yo conozco han servido para dos cosas: uno para perjudicar la autonomía de la provincia de San Luis y el otro para perjudicar la integridad de la Caja de Jubilaciones.

Ya he hecho una vez la cita de la opinión de Cushing, sobre este tema. Cushing dice en el

párrafo 2.586: «No es admisible una moción de enmienda de un proyecto de ley vetado, porque él debe ser aprobado o desechado como se halla, *as it stands*». Watson, autor de un libro titulado *On the Constitution*, (Sobre la Constitución), dice en la página 376, en una nota: «El presidente Grant, en uno de sus mensajes, recomendó al Congreso iniciar una reforma constitucional que permitiera vetar una parte de un proyecto de ley, pero el Congreso no lo hizo». Willoughby, otro autor de derecho constitucional, el más reciente y afamado autor de derecho constitucional americano, en edición de 1929, página 659, dice: «En aquellos Estados cuya Constitución no ha dado expresamente al Ejecutivo la facultad de aprobar parte y desaprobado el resto de un proyecto de ley, se ha entendido uniformemente que él no tiene esa facultad. Cuando, sin embargo, ha intentado hacerlo, las decisiones han estado en conflicto sobre si tal aprobación parcial no es absolutamente aprobación e importa un veto o si toda la medida debe reputarse aprobada teniéndose por nula la desaprobación de la parte». En la colección *Ruling Case Law*, en el tomo 25, página 891, se dice igual que Willoughby, lo que voy a leer: «Excepto cuando el Ejecutivo ha recibido la facultad de aprobar o desaprobado parte de los proyectos de ley, como en el caso de proyectos que contienen varios ítems abriendo crédito, él no puede modificar o cambiar el efecto de la ley propuesta ni hacer otra cosa, respecto de ella, que *aprobarla o desaprobala como un todo*, aunque haya sido también entendido que si él desaprueba una parte del proyecto, la desaprobación parcial obra como un veto de todo el proyecto».

En la enciclopedia de gobierno americano «*Cyclopedia of American Government*», tomo III, página 613, en el verbo poder del veto, dice así: «El presidente no puede vetar ítems sueltos de un proyecto de ley».

De manera, señor presidente, que yo concuerdo este artículo 72 con estos antecedentes americanos y llego a esta conclusión — que no es una opinión que tengo ahora sino que la he sostenido siempre como profesor de derecho constitucional, pues he estado enseñando muchos años que no hay veto parcial sino total —: que aunque se observe un solo artículo, se veta todo el proyecto.

Por eso es que el Poder Ejecutivo ha hecho muy bien en este caso, al devolver el proyecto íntegro sin promulgarlo, y en el mensaje dice así: «Al Honorable Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 72 de la Constitución,

devuelve observado a vuestra honorabilidad el proyecto de ley que le ha sido remitido a los efectos de su promulgación sobre modificación a los artículos 154, 155 y otros del Código de Comercio».

«Esta actitud del Poder Ejecutivo la determina una consideración fundamental», y concluye después así: «Por los motivos expresados, el Poder Ejecutivo observa y devuelve vuestro proyecto de ley». Como se ve no hay veto parcial; es un veto total. Está de acuerdo con la Constitución.

Para que el Senado pueda pronunciarse, en la única forma que puede hacerlo, hubiera sido necesario que la Cámara de Diputados insistiera en su sanción y rechazara el veto. Como no lo ha hecho así, al haber aceptado el veto al artículo 3º, nos remite en realidad un proyecto nuevo en el que vienen todos los artículos de la ley vetada, con excepción del 3º. Por eso sostengo que debemos considerar este despacho como una ley nueva que viene en revisión.

Reproduzco la moción en el sentido de que la Cámara apruebe inmediatamente este proyecto, como ley nueva, sin referirnos para nada a la anterior, porque de lo contrario sería cometer un error constitucional enorme.

Por último, quiero hacer notar que el señor senador por San Luis, doctor Landaburu, ha presentado un proyecto de ley reglamentando el artículo 72. Si bien en ese proyecto acepta la teoría del veto parcial, no admite en cambio que el Senado tenga que pronunciarse sobre él, cuando la Cámara de Diputados hubiera aceptado el veto. De modo que se pone en el mismo caso que yo.

Nada más.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

La circunstancia, señor presidente, de tener algunas ideas comprometidas en esta materia, me obliga a intervenir brevemente en este debate, suscitado con motivo del veto parcial a la ley de despido.

Voy a votar el despacho de la Comisión de Códigos aconsejando no insistir en la sanción anterior, pero voy a hacerlo con un criterio práctico, sin comprometer en lo más mínimo las opiniones que tengo sustentadas en el proyecto a que me voy a referir en seguida, a propósito del aspecto constitucional de este asunto.

En sesión del 1º de Septiembre de este año, como acaba de recordar el señor senador por Tucumán, presenté un proyecto reglamentario, del artículo 72 de la Constitución.

El artículo 5º de ese proyecto dice:

Artículo 5º — Si la Cámara de origen no confirmara en todo o en parte su sanción anterior por dos tercios de votos, el proyecto no pasará a la otra Cámara. En este caso, si sólo se hubiere observado parte del mismo, se comunicará tal resultado al Poder Ejecutivo para la promulgación de la parte no observada.

Fundándolo, expresé lo siguiente:

Cuando la Cámara iniciadora no insiste en su sanción, por la mayoría requerida de dos tercios, el proyecto no debe pasar a la otra Cámara, de acuerdo con el texto expreso del artículo 72, por más que alguna vez se haya discutido lo contrario. El trámite legislativo ha concluido. El pase a la Cámara revisora sólo se produce «si (la de origen) lo confirma por mayoría de dos tercios de votos». Caso contrario ha prevalecido el veto.

Este es el caso actual, señor presidente; la Cámara de Diputados no ha insistido en su sanción anterior por dos tercios de votos, de manera que el proyecto no ha debido pasar al Senado. El trámite legislativo ha concluido y el veto está triunfante definitivamente.

Reconozco que a veces se ha sostenido lo contrario y lo dije expresamente al presentar ese proyecto. Recuerdo el caso producido en el Senado con motivo de la discusión de la ley de ciudadanía en la sesión del 29 de Septiembre de 1857. En ese caso el senador Zavala hizo la misma objeción que sirvió de fundamento a mi proyecto, la objeción radica en que la Cámara revisora, cuando la iniciadora no ha insistido por dos tercios en su sanción anterior, no tiene absolutamente nada que hacer.

La opinión del señor senador Zavala fué contestada por la del senador Arias (F.), y la Presidencia, eludiendo la cuestión, dijo que no era una cuestión reglamentaria, y puso directamente a votación el asunto del veto, con el resultado que ha recordado mi colega por San Luis.

No se puede citar ese precedente como un caso en que se haya discutido a fondo la cuestión constitucional y en que haya triunfado la teoría que sustenta ahora el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales.

Posteriormente, en el caso del veto a la ley de la Municipalidad de la Capital, a que también se ha hecho mención, las cosas pasaron en Diputados como lo ha recordado el señor senador por San Luis; pero en el Senado tomó el asunto un sesgo completamente distinto.

El señor senador del Valle, expresando una opinión distinta de la que sustenta hoy la Comisión de Códigos y de Negocios Constitucionales dijo, en la sesión del 2 de Enero de 1882:

«Como se ve, la Constitución sólo da tramitación a la ley cuando la Cámara en donde ha tenido origen reúne los dos tercios que se necesitan para resistir el veto.

«Siendo esto así, y según los términos de la Constitución, el proyecto ha fenecido y no podrá reproducirse hasta las sesiones del año próximo».

Sigue emitiendo, con la autoridad que lo caracterizaba, los fundamentos de su voto, que puede definirse en las breves palabras que acabo de leer. El Senado envió la comunicación al archivo.

Cuando el asunto no ha tenido en la Cámara de origen la insistencia de la misma por los dos tercios de votos requeridos por la Constitución, el trámite legislativo ha concluido allí; y cuando se trata, como en este caso, de un veto parcial, el presidente de esa Cámara debe comunicarlo al Poder Ejecutivo para la promulgación de la ley.

Como consecuencia de esta teoría, yo voy mucho más lejos que la Comisión de Negocios Constitucionales y que la Comisión de Códigos: yo creo que ya hay ley de despido y que sólo falta la comunicación del presidente de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo.

Pero reconociendo que el asunto es difícil y que se han sustentado en diversas épocas ideas contradictorias, yo voy a votar, como he dicho, con un criterio práctico, el despacho de la Comisión de Códigos que aconseja, coincidentemente con la sanción de Diputados, no insistir en el voto anterior y aceptar el veto del artículo 3º de esa ley.

Como se han de votar los despachos por su orden, yo votaré en contra del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales, porque si bien entiendo como ella que las relaciones entre ambas Cámaras y nociones elementales de orden institucional vedan a una entrar a juzgar los términos de las comunicaciones de la otra y a apreciar el aspecto extrínseco de las mismas, no la inhibe de entrar a conocer el hecho mismo que motiva la comunicación. En este caso ese hecho significa tanto como decir que aquella Cámara no tiene dos tercios de votos para insistir en su sanción anterior, por lo cual la Comisión de Negocios Constitucionales — esa es por lo menos mi opinión — ha debido decir al Senado que teníamos una ley definitivamente sancionada y que el Senado no tenía nada que considerar sobre el asunto del veto.

El argumento que se hace, radicándolo en la última parte del artículo 72 de la Constitución,

que se refiere al caso de disenso entre ambas Cámaras, alude a la situación que se crea cuando la Cámara de origen insiste por dos tercios de votos — en cuyo caso pasa a la Cámara revisora — y cuando ésta, a su vez, no tiene esa mayoría constitucional. Ese es el único caso de discrepancia a que se refiere el artículo 72 de la Constitución, estableciendo, como consecuencia, que el asunto no podrá repetirse en las sesiones del año.

Por estas breves consideraciones, señor presidente, que he creído deber dejar a salvo por haber proyectado la reglamentación del artículo 72, en términos que no coinciden con el despacho de la comisión, votaré en contra del de la Comisión de Negocios Constitucionales y favorablemente el de la Comisión de Códigos.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Voy a fundar mi voto muy brevemente.

A pesar del respeto que me merece la opinión del constitucionalista doctor Matienzo, considero que incurre en un error al sostener que no hay posibilidad de admitir el veto parcial.

La lectura que ha hecho el señor senador del artículo 72 no es exacta, como lo voy a probar dentro de un momento.

Quiero, previamente, significar que en materia de veto, las interpretaciones del Congreso deben ser restrictivas.

El veto es un poder negativo, otorgado por la Constitución al presidente de la República. Podríamos afirmar que se trata de una supervivencia del privilegio que tenían los tribunos romanos, o de la prerrogativa de que estaba investido el rey de Inglaterra, y a la cual daban una gran importancia los constituyentes de Filadelfia, sin observar que el monarca durante más de un siglo no había ejercido esa facultad.

Es grave, señores senadores, que el presidente de la República pueda incorporarse en la puerta del Congreso y detener el paso a una ley, por considerarla agresiva o inconsulta. Es grave, y por eso las interpretaciones deben ser, de nuestra parte, siempre restrictivas. Esta vez, el mismo Poder Ejecutivo nos da el ejemplo, y resulta paradójico que sean los miembros del Congreso, precisamente, los que aboguen por la extensión de facultades de otros poderes.

Los constituyentes de Norte América, señor presidente, aceptaron el veto como un poder esencialmente colegislativo, pero calculado exclusivamente a dar los medios de defensa contra las tendencias naturales de las asambleas, a absorber los derechos de los otros poderes.

Es exacto que el artículo 72 de la Constitución sanciona el veto, pero de su mismo texto

surge con toda claridad la existencia del veto parcial que no existe en nuestro modelo de Estados Unidos, razón por la cual no podemos aplicar una jurisprudencia extraña, como lo hace el señor senador por Tucumán.

El señor senador Matienzo ha leído el artículo 72, y de su lectura parecía desprenderse que tenía razón. Dice el artículo: «Desechado en el todo o *en parte* un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve, con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo — es claro que en el todo o en la parte, según el caso — y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión.»

El doctor Matienzo leyó: «y si lo confirma *íntegramente*...», pero la palabra «íntegramente» que ha pronunciado el señor senador por Tucumán no está en el artículo.

Sr. Matienzo. — Yo he hecho un paréntesis; he explicado que la usaba en esa forma.

Sr. Palacios. — No ha explicado nada el señor senador; no resulta claro ese paréntesis. Si el artículo consignara la palabra «íntegramente», no podríamos discutir más, porque el texto de la Constitución sería terminante. Pero felizmente, la palabra no existe. El artículo expresa que «desechado en el todo o *en parte* un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara y ésta lo discute de nuevo»; es claro que en el todo o *en la parte* desecheda.

¡No es, pues, el veto parcial, de ninguna manera, inconstitucional! No se opone el artículo 72 a la sanción de la ley, ya que el Poder Ejecutivo ha devuelto el proyecto con el artículo observado. Es claro que sería inconstitucional el caso del veto parcial al artículo 8º del presupuesto del año 1932, que tenía un precedente desgraciado, porque en ese caso el Poder Ejecutivo no devolvió el proyecto, devolvió al Congreso sólo el artículo 8º y promulgó la ley de presupuesto. Así se violaba el artículo 72...

Sr. Arancibia Rodríguez. — Lo mismo ocurrió en el caso de la intervención a San Luis, que citó el señor senador por la Capital, que no tiene nada que ver con el caso que discutimos.

Sr. Palacios. — El veto parcial con promulgación de la ley llevaría fatalmente a desnaturalizar el sentido y el objetivo de las sanciones legislativas, y así lo demostró concluyentemente el actual ministro de Hacienda, entonces diputado, doctor Federico Pinedo, en la otra Cámara, oponiéndose.

Pero el Poder Ejecutivo ahora ha devuelto

no el artículo observado, sino el proyecto. La Cámara de Diputados aceptó las observaciones parciales al artículo 3º. El Poder Ejecutivo no quiere vetar la ley y así lo ha declarado terminantemente el ministro en la Cámara de Diputados y en la comisión del Senado, porque se ha dado cuenta exacta de la importancia que tiene esta sanción legislativa, de la que es partidario, y no quiere, por eso, poner dificultades a la ley, y porque, por otra parte, se ajusta estrictamente a todos los precedentes que existen en nuestro país, que valen más que la jurisprudencia norteamericana, ajena en este caso, a nuestro precepto constitucional.

Si el artículo 72 prevé que las observaciones del Ejecutivo pueden concernir exclusivamente a una parte del proyecto, sería absurdo que nosotros, a pesar de la opinión del Poder Ejecutivo, entendiéramos que había que dar a este artículo una interpretación restrictiva.

He dicho que todos los antecedentes permiten admitir el veto parcial. ¡Con cuánta mayor razón habría que admitirlo en este caso en que se trata de una ley que beneficia a tantos millares de trabajadores dignificando su situación!

En el caso de la Constitución de San Juan, el Poder Ejecutivo solicitó la reconsideración de la ley aprobatoria, y la supresión de su artículo 2º. En el Registro Oficial de 1854-1856, página 407, figura el texto de esa ley, con la siguiente nota: «La presente ley fué observada por el Poder Ejecutivo nacional en su artículo 2º, pidiendo su supresión. El 18 de Septiembre de 1856, la Honorable Cámara de Diputados aceptó el veto respecto del primer inciso de dicho artículo, y confirmó el segundo.»

En el caso de la ley de ciudadanía, a que se ha referido el señor senador por San Luis, el Poder Ejecutivo, en el mensaje que figura en el Diario de Sesiones del Senado del año 1857, página 435, dice: «Con fecha 19 de Septiembre de 1857, me ha sido comunicado el proyecto de ley de ciudadanía votado por el Congreso en la misma fecha, y en última sanción de esa Honorable Cámara y, desde luego, me habría decidido a promulgarla si el inciso 4º del artículo 2º y el inciso 3º del artículo 9º, no me hubieran puesto en la necesidad de observarlos, usando de la atribución que la Constitución me acuerda». Y el decreto dispone así: «Departamento del Interior, Paraná, 26 de Septiembre de 1857. Observo la presente ley, pidiendo la reconsideración del inciso 4º del artículo 2º, e inciso 3º del artículo 9º, con el mensaje acordado.»

En la sesión del 27 de Septiembre de 1857, se consideró el mensaje del Poder Ejecutivo, en el caso de la ley de elecciones, a que también se ha referido el señor senador por San Luis, y cuya parte final expresa: «Las razones que dejo manifestadas me deciden a hacer uso de la atribución que me concede la Constitución nacional, señalando a la consideración del Honorable Senado los artículos 7º del capítulo II, y el 63 del capítulo IX.»

Es curioso, señores senadores, que nosotros que sancionamos las leyes, querramos interpretar el artículo 72 en el sentido de que las atribuciones del Poder Ejecutivo son más amplias que lo que reconoce el mismo Poder Ejecutivo en los mensajes que envió al Congreso con vetos parciales.

El caso de la ley municipal, en 1881, es exactamente igual al que ahora consideramos y las opiniones que se han citado de personalidades como Calvo y don Bernardo de Irigoyen, ministro este último de Relaciones Exteriores entonces, demuestran de una manera que no permite la más leve hesitación, que debemos votar el despacho, no insistiendo sobre el artículo 3º, que es el único vetado por el Poder Ejecutivo.

En el mensaje se dice que el Poder Ejecutivo somete al Congreso las observaciones anotadas y espera que reabriendo sus deliberaciones sobre los artículos objetados, se sirva modificarlos, dejando subsistente y expedita la facultad del presidente de la República de nombrar al gobernador del municipio, sin las trabas que le oponen tales artículos.

En el caso de la intervención a la provincia de Buenos Aires, ley complementaria 10.239, el año 1917, el Poder Ejecutivo en su mensaje, expresa lo siguiente: «Para poder dar cumplimiento a la ley sería, pues, necesario suprimir la fecha establecida en el artículo 1º y dejar sin efecto la parte final del artículo 7º. Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo se considera en el deber de hacer de la facultad que le acuerda el artículo 72 de la Constitución nacional, devolviendo a vuestra honorabilidad la citada ley con las observaciones indicadas.»

Devuelve la ley, como lo ordena la Constitución, pero simplemente para que se considere el inciso observado.

En el famoso caso de la exportación de azúcar, aparece un mal precedente: veto parcial con promulgación de la ley. El mensaje enviado a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, consta en el Diario de Sesiones de

la Cámara respectiva, tomo VII, página 849, del año 1919. Dice así: «Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad vetando la ley 11.002, de fecha 6 del corriente, en su artículo 4º derogatorio del artículo 7º de la ley de exportación, en la parte que faculta al Poder Ejecutivo a suspender), etcétera. Y por decreto dispone: Artículo 1º — Promúlgase y tén-gase por ley de la Nación número 11.002 sobre derecho de azúcar, con excepción de las disposiciones contenidas en el artículo 4º de la misma ley, vetada en el mensaje correspondiente.»

En el caso de los impuestos internos al tabaco, el mensaje enviado a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, aparece en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del año 1920, tomo III, página 211. Dice: «El Poder Ejecutivo en uso de sus facultades hace saber a vuestra honorabilidad que observa parcialmente las modificaciones introducidas al artículo 5º, inciso 1º, de la ley de impuestos internos al tabaco», etcétera. Luego viene el decreto.

En el caso de la ley de pago de salarios en moneda nacional, el Poder Ejecutivo se dirige al Congreso exactamente en la misma forma.

Por último, en el caso del presupuesto para el año 1932, el presidente de la República vuelve a la mala práctica, pero siempre dentro del veto parcial, vetando el artículo 8º del presupuesto y promulgando la ley.

Siempre dentro de este concepto restrictivo de las propias facultades procede el Poder Ejecutivo. Y es lamentable que constitucionalistas de la talla de nuestro eminente colega el doctor José Nicolás Matienzo, sostengan que el Poder Ejecutivo tiene más atribuciones que las que en realidad él se atribuye, porque eso podría conducirnos a la expansión de facultades, basándose en una tesis que viene tan prestigiada por la circunstancia de ser su autor el doctor Matienzo.

El señor senador por San Luis, a mi juicio, con las citas de Calvo y Bernardo de Irigoyen, ha dejado terminado este asunto.

Cuando Calvo en la Cámara de Diputados decía: «Hago moción, primero, para que la Cámara apruebe, es decir, para que no insista en su sanción primitiva y acepte la modificación del Poder Ejecutivo; segundo, para que una vez que no se haya insistido, se le comunique al Senado para que, si está de acuerdo, lo pase al Poder Ejecutivo para que promulgue la ley municipal»; cuando Calvo hacía esa moción, daba solución clara a esta cuestión. Y cuando don Bernardo de Irigoyen, tan meticulado, tan

apegado en otras ocasiones a la forma y con cuya amistad se honraba — porque era realmente un hombre superior — nuestro distinguido colega el señor senador Matienzo; cuando el doctor Irigoyen aprobaba esa moción sosteniendo una interpretación restrictiva al artículo 72, demostraba, anticipadamente, que huelga este debate.

Sr. Landaburu. — Permítame el señor senador que recuerde que en aquel caso el Senado — y en esa situación estamos nosotros — consideró que la Cámara de Diputados no debía haber pasado el asunto a su consideración y resolvió en definitiva enviarlo al archivo.

Sr. Palacios. — He oído al señor senador y respeto mucho su opinión, pero yo me he referido, no a la sanción del Senado, sino a las opiniones de Calvo y de Irigoyen.

Sr. Landaburu. — Yo me he referido al caso como precedente. El final fué el que acabo de indicar.

Sr. Palacios. — Su opinión es muy simpática, pero seguramente no la aceptaría la mayoría del Senado. Ojalá la aceptara porque, sin duda, sería mucho más útil que ya tuviéramos la ley.

En consecuencia, voy a votar, señor presidente, en favor del despacho de la comisión, convencido de que en esta forma habremos contribuido definitivamente a la sanción de una ley que reglamenta y disciplina las actividades del comercio y de la industria, a la vez que dignifica la situación de millares de trabajadores. No malogremos esta noble iniciativa que vela por los valores humanos y resuelve una cuestión jurídica y social en beneficio colectivo.

Nada más.

Sr. Matienzo. — Pido la palabra.

Insisto en que yo he propuesto un temperamento más rápido y más constitucional; esto es, que el Senado, en una sola votación, apruebe el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, considerando como que la Cámara de Diputados nos manda un proyecto de ley sancionado, menos el artículo 3º, y se comunique al Poder Ejecutivo inmediatamente. Esa es la proposición que hice con fecha 19 de Julio próximo pasado y se ha hecho la disidencia sobre esa proposición para atribuirse otros la defensa de los dependientes.

Ahora, señor presidente, que el Poder Ejecutivo, en el mensaje actual, se limita a oponer un veto parcial, no es exacto, porque devuelve el proyecto y la Constitución no dice en ninguna parte, absolutamente, que devuelto un proyecto con una observación a un solo artículo, se contraiga la votación a ese artículo.

¿Cuál sería, señor presidente, la objeción total? Dice la Constitución: «Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo». Para desecharlo en todo, ¿habría que hacer objeciones artículo por artículo, desde el primero hasta el «comuníquese»? Para desecharlo en parte, ¿a cuántos artículos habría que limitarse? ¿A uno sólo, a dos, a tres, al 99 % de los artículos?

Esa frase: «desechado en todo o en parte», sirve de aclaración; quiere decir que la Constitución supone que el Poder Ejecutivo puede tener el pensamiento de ocuparse de una parte mayor o menor del proyecto. Nada más.

No se limita ninguna facultad del Congreso. El doctor Irigoyen se equivocaba en el caso citado por el señor senador por San Luis, diciendo: no hay ley. ¿Cómo no va a haber ley? Si el Congreso quiere, hay ley. La proposición que hago es para que haya ley y la hubiéramos tenido desde Julio.

Supongamos, señor presidente, que hubiera habido un veto de un solo artículo tan fundamental que, si se aceptase ese veto, fuese necesario modificar otras disposiciones del proyecto; por esa razón la Constitución ha sido previsoramente y establece que el Congreso debe considerarlo de nuevo, como si se tratase de una reconsideración, porque eliminada una disposición puede alterarse toda la esencia del proyecto. De manera que lejos de ser contrario a la autonomía del Congreso, el sentido que percibo en el artículo 72 es, todavía, favorable, porque lo pone en la situación de volver a tratar, con toda seriedad, si conviene o no conviene insistir o si conviene formar un nuevo proyecto de ley, como yo digo, eliminando las observaciones del Poder Ejecutivo en parte o en todo.

Por esa razón, señor presidente, yo hago moción para que prescindamos del despacho de la comisión y votemos inmediatamente el proyecto de la Cámara de Diputados, tal como yo lo entiendo, es decir, la ley 11.729, menos el artículo 3º, y se le comunique al Poder Ejecutivo en seguida.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

Deseo hacer una rectificación breve, para que no se vote este asunto con la impresión de las afirmaciones que reitera el señor senador por Tucumán, respecto al alcance y la forma de la sanción de la Cámara de Diputados, que estamos tratando en este momento.

El señor senador se empeña en demostrar o en sugerir que la Cámara nos ha enviado un nuevo proyecto de ley para que lo discutamos

y sancionemos nuevamente. Y eso no es exacto.

La Cámara ha resuelto, de acuerdo con la opinión de los tres diputados que hablaron informando este asunto, hacer lo mismo que estamos por hacer nosotros, con los mismos argumentos. El señor miembro informante, diputado Vicchi, dice estudiando los procedimientos sobre el veto: «Otro procedimiento que se indicó y que fué el que en definitiva adoptó la comisión por entender que se ajustaba a la mejor doctrina constitucional, consistía en la aceptación lisa y llana de las observaciones del Poder Ejecutivo y por consiguiente, la no insistencia en las disposiciones observadas. Entiendo que la comisión ha acertado el buen camino y no era esto de poca trascendencia, tratándose de una materia tan fundamental como la que ahora consideramos.»

La comisión aconsejó, pues, no insistir, no enviando una nueva ley para que nosotros la discutamos y la sancionemos.

Lo mismo dice el diputado Ruggieri, que habló en nombre del grupo parlamentario socialista. «El Poder Ejecutivo ha dicho a la Honorable Cámara, por intermedio del señor ministro de Justicia, que sólo ha objetado el artículo 3º, no observando parte alguna de las demás disposiciones de la ley. Creemos por eso, que el Congreso ha podido limitar su actual intervención a confirmar, o no, el artículo 3º del proyecto. Su voto negativo, coincidente con el del Honorable Senado, habría determinado la inmediata comunicación del resto del proyecto al Poder Ejecutivo, para su promulgación.»

Lo mismo sostuvo el diputado Courel, que habló en nombre del bloque, demócrata nacional.

No tenemos nada en discusión que se relacione con un proyecto nuevo. Si lo tuviéramos, señor presidente, el resultado estaría muy lejos de ser el que enuncia el señor senador por Tucumán; si fuéramos a discutir nuevamente esta ley, como se pretende, sería rechazada otra vez por la mayoría del Senado, como la rechazó el 19 de Diciembre del año pasado, en todo lo que era inconstitucional; no se tendría, entonces, la ley rápida, que propugna el señor senador por Tucumán.

Debo agregar otra rectificación. El señor senador nos leyó la jurisprudencia y opiniones de tratadistas norteamericanos.

La Constitución norteamericana no autoriza el veto parcial de nuestra Constitución, no contiene la última parte del artículo 72 de nuestra Constitución. No tiene nada que ver, en lo que se refiere al veto parcial. La Constitución argentina, en materia de veto parcial, está inspi-

Septiembre 18 de 1934

CAMARA DE SENADORES

45ª Reunión. Cont. de la 26ª Sesión ord.

rada en Alberdi y en la Constitución chilena de 1833.

Nada más.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Ruego al señor senador por Tucumán se sirva precisar su moción.

Sr. Arancibia Rodríguez. — ¿Con qué objeto? Habría que votar primero el despacho de la comisión.

Sr. Matienzo. — Mi indicación consiste en lo siguiente: que se acepte como venido en revisión de la Cámara de Diputados el mismo proyecto que constituye la ley vetada, menos el artículo 3º, y se comunique al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar primeramente el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales. En el caso de que fuera rechazado, se votará la indicación del señor senador por Tucumán.

Sr. Bravo. — No, señor presidente. Me permito hacer una observación al procedimiento indicado por la Presidencia, porque no creo que sea el más lógico y, además, porque conducirá a la Cámara a un verdadero callejón sin salida.

Lo que la Cámara tiene que considerar en este momento, es el dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales, pronunciándose sobre una cuestión de forma, o sea el alcance de la comunicación de la Cámara de Diputados, cuestión que, en el fondo, no tiene ninguna importancia porque cualquiera que sea la sanción del Senado, no modificará en nada el texto del despacho de la Comisión de Códigos.

Por la proposición que formula el señor senador por Tucumán, si la Cámara llegara a aceptarla — quiero colocarme en el caso de una hipótesis absurda, — la Cámara tendría que entrar a discutir el proyecto en revisión de la Cámara de Diputados de acuerdo con las normas constitucionales y reglamentarias, vale decir, hacer la discusión en general, después en particular, y si es que se introdujeran modificaciones en la discusión en particular, remitir el proyecto de nuevo a la Cámara de Diputados en segunda revisión. En una palabra, iniciaríamos la tramitación parlamentaria y constitucional de una ley, como si se tratara de un proyecto nuevo, con la consiguiente pérdida de tiempo.

Sr. Matienzo. — ¿Qué pérdida de tiempo? Hace dos meses que yo planteé la cuestión y que pasó a comisión; ha habido tiempo sobrado para tratarla.

Sr. Bravo. — Pero se han perdido dos meses,

señor senador, por una discrepancia, que aparentemente no tiene importancia, pero que es substancial por la autoridad reconocida que tiene el señor senador en esta materia, que le da tanto valor a sus observaciones.

Sr. Matienzo. — ¿Adónde va a parar mi autoridad si la mandan al canasto? (*Risas*).

Sr. Bravo. — Precisamente, señor senador, porque la Cámara le reconoce su autoridad, sus observaciones aunque sean inconsistentes como en este caso, tienen un peso considerable, que es lo que determinó a la Cámara que no se precipitara a dar un voto después de haber oído al señor senador, y haya pasado el asunto a la Comisión de Negocios Constitucionales; lo que demuestra que la Cámara ha dispensado al señor senador las consideraciones a que le da derecho su vida de profesor y constitucionalista. Pero no abuse, señor senador, de su autoridad de constitucionalista, porque en este caso el señor senador está equivocado.

Sr. Matienzo. — Se me ha atribuido autoridad para quitármela después. (*Risas*).

Sr. Bravo. — El señor senador ha hecho la exégesis del artículo 72 de la Constitución acomodando la interpretación a su modo de ver, y a la interpretación de textos constitucionales americanos.

Sr. Matienzo. — ¡Nunca he acomodado la interpretación de la Constitución a mi modo de ver personal!

Sr. Bravo. — No deseo discutir la parte central del asunto que ya han expuesto con acopio de antecedentes e ideas los señores senadores por San Luis y por la Capital. Lo que deseo es que se establezca un orden para votar, y que ese orden conduzca a la Cámara, en definitiva, a lo que la Cámara tiene que resolver y es una objeción hecha por el Poder Ejecutivo a una ley sancionada por el Congreso. Aceptamos por una razón de orden práctico que el Senado tenga también que pronunciarse después de la sanción de la Cámara de Diputados. Y por eso aconsejamos aceptar el despacho de la Comisión de Códigos en primer término, y dejar para pronunciarnos después sobre la cuestión de forma planteada por la Comisión de Negocios Constitucionales que no tiene ninguna importancia. Consideraremos así en su orden de importancia: primero el despacho de la Comisión de Códigos y después lo accesorio, la mera cuestión de forma que es el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales.

Sr. Palacios. — La Comisión de Negocios Constitucionales lo entiende así; está de acuerdo con ese criterio.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Fué una simple consulta a la comisión que dejaba expedido el camino para el despacho que debía hacer la Comisión de Códigos; lo único que se tuvo en vista fué no impedir el despacho de la Comisión de Códigos.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Si hay asentimiento se votará nominalmente de acuerdo con la regla constitucional el despacho de la Comisión de Códigos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Habiendo asentimiento, se procederá a tomar la votación nominal por sí o por no. Los señores senadores que voten por no, votan por la no insistencia.

Sr. Matienzo. — ¿En qué consiste el despacho?, porque aquí no encuentro ninguno.

Sr. Palacios. — Es el despacho de la Comisión de Códigos.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a tomar la votación.

—Votan por la «no insistencia», los señores senadores: Serrey, Landaburu, Galandéz, Campos, Lubary, Correa, Porto, Laurencena, Palacios, Cantoni, Bruchmann, López Peña, Bravo, Castillo, Rothe, Vera, Arancibia Rodríguez, Vidal.

—Al requerírsele el voto al señor senador Matienzo, dice:

Sr. Matienzo. — Me abstengo de votar por considerar esto inconstitucional.

Sr. Secretario (Figueroa). — Han votado 18 senadores por la no insistencia y 1 se ha abstenido.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda aprobado el despacho de la comisión.

Sr. Matienzo. — Lo lamento por la Constitución.

Sr. Palacios. — ¡La Constitución se ha salvado, señores senadores!

—Aplausos en las galerías.

4

LEY DE PRENSA

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Continúa en discusión el despacho de la Comisión Especial de Prensa. Tiene la palabra el señor senador Cantoni.

Sr. Cantoni. — Señor presidente: confieso que no era mi propósito embarcarme en este debate, en la defensa particular de determinado órgano de la prensa argentina o de determinado periodista; pero las palabras pronunciadas por el señor senador por la provincia de Buenos Aires en la clasificación que ha hecho de la prensa argentina, alterando la verdad histórica, y la injusticia que esas palabras importan para un gran órgano periodístico, es lo que me ha obligado a esta intervención, convencido de que con ello defiende el prestigio del periodismo en general.

Cuando el señor senador por Buenos Aires se refería al beneplácito con que desde la Casa de Gobierno se observa este proyecto de ley llamado de amparo a la prensa, me encontré más satisfecho que nunca por haber releído la crónica de aquel homenaje tributado a lo que el señor senador por Buenos Aires ha denominado, con agravio para la prensa nacional, «el rey de los pasquines» o «el pasquín a toda orquesta», pues viene a mi memoria, en la evocación del acontecimiento de aquella noche, el recuerdo de la figura briosa y juvenil, llena de talento y de abnegación que era la de Antonio de Tomaso; y más que nunca lamento el vacío por él dejado y que aun perdura en el gabinete nacional, porque estoy seguro, señor presidente, que no hubiera faltado en un debate de la trascendencia del que estamos realizando, su palabra de condenación a esta iniciativa para reafirmar los ideales que inspiraron toda su fecunda y laboriosa actuación pública.

El doctor De Tomaso en aquel banquete pronunció un discurso del cual he de leer algunos párrafos, por lo que ellos significan para la prensa nacional. De Tomaso decía lo siguiente: «La fiesta de esta noche constituye un doble homenaje. Es un homenaje justiciero al periodista que ha servido como nadie la causa de la democracia argentina»; y agregaba: «y es un homenaje a la libertad de imprenta de la cual se diría es en este pedazo de América uno de los símbolos más representativos y populares.»

Luego continuaba así: «El enorme poder de la letra impresa, para suscitar en las masas ideas y sentimientos, cuando es puesto al servicio de las grandes causas, se evidenció en forma impresionante, en esa campaña que quedará, en la historia política de la República Argentina, como una concluyente demostración de lo que vale, en la vida de los pueblos, la institución de la prensa.»

Más adelante, el doctor de Tomaso agrega-